

LOS PRINCIPIOS.

DIARIO DE LA TARDE.

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FERIADOS.

REDACTOR PROPIETARIO, ANGEL POLIBIO CHAVES.

SERIE V.

Quito, diciembre 12 de 1883.

NUM. 97.

CONVENCIÓN NACIONAL.

Sesión del 19 de noviembre de 1883.

PRESIDENTE DON H. SR. GENERAL SALAZAR.

Conclusión.

La Constitución no es un programa para ejercicios retóricos, y no son propias de ella las tesis del derecho natural. Qué es, ciertamente, una Constitución? Un conjunto de leyes fundamentales para el régimen de una Nación. Fijámonos en esto y en el verdadero concepto de la ley; qué diremos, pues, de aquellas cuyo objeto es persuasivo y no imperativo? Ley viene del *ligando*, ata la inteligencia, y un legislador no debe convencer sino ordenar. Y no se crea, Excmo. Señor, que negaré mi voto solamente al artículo que se discute; no apoyaré ninguno de los artículos que no sean netamente fundamentales, ó que no sean, por su naturaleza, objeto de la Ciencia Constitucional. Dicho se está con esto que no deben formar parte de la Carta que discutimos, ni, por tanto, he de apoyar con mi voto, las reglas relativas á la ciudadanía ó domicilio político, ni las relativas á las garantías ó derechos naturales de los individuos, tanto en sus relaciones mutuas, como en sus relaciones con la autoridad; porque esas reglas y esos derechos pertenecen, ora al derecho privado, ora al derecho administrativo, más no al constitucional. Cual es, ciertamente, el objeto de este último? Las relaciones de la autoridad consigo misma y no con los individuos. Construir, es organizar un todo, es darle forma, distribuyendo armónicamente las funciones de sus partes; y como la forma de una sociedad es la autoridad, resulta que la Constitución debe comprender únicamente la disposición armónica de las relaciones de la autoridad política consigo misma; ¿Qué es el derecho administrativo? Aquella parte del derecho público interno que trata de las relaciones de la autoridad y la multitud política entre sí: á esta parte deben, pues, corresponder los títulos de los derechos y las garantías. La Constitución comienza. Excmo. Señor, allí en dando se establece la forma de Gobierno y la división de poderes, y no otra cosa debe comprender, en mi concepto, la Carta fundamental. Debemos quitar, en cuanto sea posible, los motivos para los trastornos. Esto, en cuanto á la parte teórica

del artículo; fijémosnos ahora en las contradicciones de su redacción. Dice el artículo: "La soberanía que es inalienable é imprescriptible, reside en la Nación, quien la ejerce directamente en las elecciones populares y, en los demás casos, por medio de las autoridades que la Constitución establece." La soberanía, Excmo. Señor, pertenece á la categoría de los derechos adquiridos, y en el artículo figura entre los innatos, una vez que se lo considera como inalienable. Sabido es que los derechos se dividen en innatos y secundarios ó derivados: los primeros se fundan en nuestra naturaleza; en el hecho mismo de nuestra existencia, como el derecho de vida, el de la personalidad, &c.; los segundos, en un título accidental, como el de propiedad. Según esto, claro está, que el derecho de soberanía pertenece á los segundos. Dice también el artículo que la Nación ejerce directamente la soberanía en las elecciones populares; error jurídico. En las elecciones se ejerce solamente una parte y no toda la soberanía, ya que ésta comprende también, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y á nadie se le ocurre, que la Nación ejercita ninguna de estas atribuciones en una simple elección. Dicese, finalmente, que en los demás casos, la Nación ejerce la soberanía por medio de las autoridades que establece la Constitución; contradicción manifiesta con la primera parte. Si la soberanía es innata é inalienable, no se puede ceder ni traspasar, y la excepción, *por medio*, es, en este caso, contradictoria, pues la inalienabilidad de un derecho se opone á la cesión ó traspaso del mismo; así como no se puede ceder ó traspasar á otro el derecho á la vida ó á la alimentación. Implica, pues, que la soberanía sea inalienable y que, al mismo tiempo, se ejerza por medio de otro. Por estas razones, Excmo. Señor, no apoyaré la moción que se discute.

El H. Presidente observó que, según el H. Preopinante, todos los legisladores de la América latina y de Europa habían hecho un disparate, consignando este principio en las constituciones; que no existe la contradicción notada, pues el pueblo ejerce directamente la soberanía en las elecciones, y, en los demás casos, por medio de sus delegados; siendo así mismo enteramente fútil el argumento del H. Muñoz, relativo á que hay contradicción en decir que el pueblo es soberano, cuando no se le da otro derecho que el de elegir, ya que lo mismo podría decirse del Poder Legislativo, del Ejecutivo y del

Judicial, todos los que ejercen solo una parte de la soberanía. Finalmente, que el pueblo no enajena su soberanía al delegarla á sus representantes, como no enajena sus derechos un mandante por el hecho de constituir el mandato.

El H. Crespo Toral dijo lo siguiente (dió por escrito): "El camino mismo que ha tomado la discusión, nos está indicando, Señor Presidente, que el asunto es puramente especulativo. Para tratarlo, esta H. Asamblea se ha convertido en una academia; y en vez de leyes, hace por darnos declaraciones científicas. Efecto; ¿qué es la ley? Ley es ordenamiento de la autoridad en lo tocante á la consecución del fin social. El artículo que se discute está, pues, muy lejos de reunir los caracteres de la ley. No hay mandamiento de la autoridad, ni dirección al fin social, es algo como la definición de un concilio ó una universidad, nada más.

Además, bien sabido es de todos que en la Constitución ha de constar la forma de Gobierno en todos sus detalles. La forma de Gobierno, como lo observó ya el H. Borja, consta en el artículo que dice: "El Gobierno del Ecuador es popular, representativo, &c." ¿Para qué, pues, repetirlo? Es menester evitar en las leyes toda redundancia defectuosa, todo poesía estéril, como diría el H. Cárdenas. Precisión, claridad, concisión son cualidades necesarias en la redacción de las constituciones. Sólo así se evitan las revisiones y reformas, tan ocasionadas á serios quebrantos sociales. Se ha de hacer de manera que la ley sea un depósito inviolable y sagrado, que se mantenga siempre á salvo de peligrosas correcciones.

Se ha dicho, por el H. Señor Presidente, que la soberanía popular ó nacional es artículo obligado de todas las constituciones. Casi todas las constituciones europeas, así como la de los Estados Unidos, no lo traen, y, sin ir más lejos, de entre las americanas, las federales de Colombia, Venezuela y la República Argentina y las unitarias de Bolivia y el Paraguay, lo han hechado á un lado.

Es preciso notar también que la palabra nación es de suyo muy elástica, y puede producir sinietras interpretaciones. Nación como sinónimo de sociedad ó compuesto moral de pueblo y autoridad, está bien. Pero, es el caso que, los más toman la palabra *nación* como equivalente de multitud; y entonces venimos al sofisma del sufragio universal, al absurdo de la democracia pura, conde-

nada ya por muchos escritores liberales. Tocqueville dice: "La democracia pura es un imposible y una contradicción." "La democracia es la intriga y el engaño," ha confesado también Montesquieu, con relación también Montesquieu, con relación á que son poquitos los que intervienen en el Gobierno, siendo así que la democracia llama á todos.

El Sr. Fuentes, publicista peruano, que, por cierto, no será sospechoso á cierta escuela, confiesa: "Todo sistema de Gobierno fundado en la absoluta é ilimitada soberanía del pueblo es de imposible realización. Tanto tiene de justo y apetecible la igualdad civil, cuanto de injusto y peligroso la igualdad política." El Sr. Arosemana, al tratar del artículo sobre soberanía de nuestra Constitución del 61, dice: "Quién es el pueblo de que habla la Constitución ecuatoriana? No puede ser la generalidad de la población, pues en ella hay muchísimos individuos que no tienen ni podrán tener nunca la más pequeña intervención en los asuntos públicos, ó sea esos átomos de soberanía cuyo conjunto forma la potestad que la caracteriza. Son los ciudadanos los únicos poseedores del derecho político en que se comprende la soberanía, y éstos componen siempre una parte, más ó menos extensa, del pueblo, pero nunca la totalidad, y hasta ahora ni siquiera han llegado á la mayoría absoluta."

No estaré, pues, por la moción; porque la considero inútil y peligrosa además; pues que la palabra *nación* puede tomarse por la multitud, y la multitud, como confiesan los citados escritores liberales, no puede ser el sujeto de la soberanía política."

El H. Cevallos Salvador expuso que, sin combatir la soberanía del pueblo, que creía la más lógica, la más justa y natural, por ser la ley de las mayorías; no juzgaba que debía aprobarse la proposición "porque en las leyes nada debe ser especulativo, sino esencialmente práctico."

El H. Borja (Luis F.) amplió su razonamiento anterior agregando que el hecho aducido por el H. Presidente, de que todas las constituciones han consagrado este principio, no es argumento aceptable, ya que, como muy bien lo ha dicho Bentham, el profundo pensador, el argumento de autoridad es, á veces, el mayor de los sofismas; que en una Constitución no pueden consignarse los principios en que se fundan sus disposiciones, pues, de ser así, tendría que consignarse todos los principios de moral y de justicia; y que el art. 1.º del proyecto contiene

ciertamente una definición, pero necesaria, por cuyo motivo el H. proponente votó en favor de él; no así el que pretende agregar, una vez que la soberanía del pueblo es un axioma incontrovertible y nadie será tan osado que lo niegue.

El H. Andrade Marín dijo lo siguiente (que lo ha dado escrito): "Jamás podré yo convenirme con que la declaratoria de la fuente de la soberanía sea innecesaria en nuestra Constitución. Si fué aprobado el artículo 1.º como fianza de la autonomía nacional, ¿cómo puede impropriarse la moción que determina la base única del poder republicano? Yo bien sé que algunas constituciones han suprimido el artículo que se discute; pero entiéndase que ellas en cambio han expresado con franqueza que el cuerpo constituyente obra "por autoridad, por autorización del pueblo soberano"; pero si nosotros no tenemos esta primera declaratoria, y queremos suprimir también la segunda, dejamos conocer que no se admite la soberanía nacional.

Lo de que no deben hacerse simples declaratorias en la Constitución, es argumento que nada prueba, porque prueba demasiado; y así el H. Muñoz, para ser consecuente, debe dar su voto negativo, no sólo cuando se trate de establecer todas las garantías del hombre y del ciudadano, sino también cuando determinemos sus deberes, cuando establezcamos la diferencia entre ecuatorianos y extranjeros, y entre simples ecuatorianos y ciudadanos. El artículo mismo relativo á la religión del Estado, no es más que una declaratoria; por lo cual el H. Muñoz debía también pedir la supresión de ella; pero estoy muy lejos de creer que acepte este último resultado de su raciocinio. Lo que yo veo claro es que tenemos miedo de asentar un principio que, fuera de aquí, nadie lo niega, pero que se controvierte todavía en nuestro seno. Cuando nuestros padres, á principios de este siglo, comenzaron á alborotarse contra la autoridad de Fernando VII, que venía divina desde trescientos años atrás, y cuando así nos dieron independencia y libertad, es cosa digna de notarse que en España mismo estaba proclamada la soberanía nacional como principio digno de ser el artículo 3.º de la Constitución política de 1812. He aquí el artículo: "La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece á ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales". ¿Ni cómo podría revocarse á duda que la esencia del poder está radicada en todos los miembros de la asociación política, cuando suprimida esta fuerza, desaparece por completo todo origen de poder? He sabido por persona autorizada que algunos venerables eclesiásticos de Cuenca han sostenido públicamente que la revolución veintemillana era un hecho consumado y que, como tal, el pueblo debía resignarse á su Gobierno, sin duda porque el Espíritu Santo bajó donde Veintemilla después de la revolución y lo formó autoridad divina. Empero esos eclesiásticos han quedado desacreditados ante el buen sentido del pueblo cuencano que en su lugar ha enviado á esta Asamblea otros muchos más ilustrados. Yo, señor Presidente, entiendo que los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, en principios, no son más que simples dimanaciones, simples comisiones del gran poder soberano, que reside inmanentemente en el pueblo. Yo creo, por ejemplo, que si una Asamblea

Nacional pervierte y trastorna todos los derechos políticos y sociales, todas las garantías del hombre y del ciudadano, el pueblo que nunca pierde su soberanía, puede muy bien reivindicarla, como lo enseñan los principios de la enseñanza y lo ha sancionado la práctica de todos los pueblos civilizados. Por estas razones, tengo á honra estar por la moción; y aun más exijo desde ahora que ésta se someta á votación nominal."

El H. Vázquez replicó que el artículo que trata de la Religión, lejos de ser especulativo, es eminentemente práctico; que el argumento tomado de la Constitución de Cádiz no prueba nada, pues aquella Constitución se dió después de la batalla de Bailén, y en tales circunstancias era oportuna la declaración de la soberanía del pueblo español, que acababa de sacudir el yugo de los franceses; pero que, en nuestra Constitución, no tendría utilidad ninguna el artículo que se pretende agregar, ya que la independencia de la Nación está suficientemente declarada en el artículo 4.º y reconocido el principio de la soberanía cuando se establece la forma de gobierno; y que hay un error en suponer que, con tal disposición constitucional, se conseguiría reprimir los avances del despotismo.

El H. Enriquez dijo lo siguiente, [dado por escrito]. "Señor Presidente: Siento no estar de acuerdo con el H. doctor Borja, quien cree que "ningún Diputado, ni nadie, será tan osado que niegue el dogma de la soberanía popular"; pues yo, talvez por milignorancia, soy del corto número de los osados que niegan ese supuesto dogma. Observo, Excmo. Señor, y con profunda pena, que en la H. Asamblea hay algún temor de defender con franqueza la verdad en esta materia; y digo que lo observo con pena, porque callar es un delito cuando se trata del sagrado interés de la verdad. Los que pertenecemos á la escuela católica negamos, Excmo. señor, que la fuente de la autoridad sea la voluntad del pueblo, negamos que el pueblo sea soberano; porque creemos que la autoridad social tiene su origen en Dios, y que el derecho de ejercerla para conseguir el fin social, no es natural y esencialmente del pueblo, pues no es posible que tenga un derecho esencial cuyo ejercicio le sea naturalmente imposible, é imposible es, como lo comprueban la razón y los hechos, que el pueblo, ni siquiera la mayor parte, ejerza la soberanía. La autoridad, derecho de obligar, es, como la sociedad, obra de Dios; y la teoría que hace nacer é emanar la autoridad de la voluntad popular tiene su origen en el absurdo sistema del pacto social. La autoridad, es, pues, tan inherente á la sociedad, que sin aquella no podría existir ésta, porque es el principio inteligente, la vida misma del ser social; y como el pueblo, esto es la multitud, es la materia necesaria, la causa primitiva de la autoridad, en este sentido los escritores católicos afirman también que ella reside en la sociedad, sin que esto signifique que la (pues multitud y autoridad constituyen la sociedad) tenga el derecho de soberanía; ya que el derecho de concretar la autoridad, esto es, de determinar, por medio de la elección, la persona física ó moral que ha de ejercer la soberanía, no es propiamente hablando, derecho de soberanía, porque no es derecho de gobernar: quien elige, no gobierna. Por esto digo que la soberanía no es derecho de la multitud, aunque á es-

ta corresponda, supuesta la igualdad de los derechos individuales por razón de la igualdad de naturaleza, conferir el título para el ejercicio de la soberanía, la que, por lo mismo, no se deriva inmediatamente del pueblo, no tiene su origen inmediato en la voluntad popular; y por consecuencia, quien ejerce la soberanía, no ejerce la autoridad delegada del pueblo, puesto que la autoridad no es del pueblo, aunque éste, repito, tenga el derecho de concretarla eligiendo la persona ó personas que han de poseer la soberanía para dirigir la sociedad á su fin, sin que el pueblo tenga derecho para retirar, cuando quiera, la autoridad al magistrado, como puede hacerlo un mandante respecto de su mandatario. No lo cree así el H. doctor Marín, quien dice que, como miembro de esta H. Asamblea, es un mero mandatario del pueblo soberano, y que la autoridad que ella ejerce es únicamente delegada del pueblo, el verdadero, el único soberano; más yo creo que el pueblo no podría, aunque quisiese, separar por solo su voluntad, el H. doctor Andrade Marín de la H. Asamblea, ni retirar ó privar á esta de la autoridad, porque así le plazca; pues, aunque el título para poseerla sea la elección popular, no se funda aquella en la voluntad del pueblo, sino en los principios eternos de la justicia y de moral que tienen su fuente en Dios y son superiores á esa voluntad. Creo, pues, que la soberanía, [poder social independiente] existe ó reside en la sociedad, esto es en la Nación, en el sentido que he explicado; pero que esa soberanía no tiene su origen inmediato en el pueblo mismo, sino en Dios, cuya voluntad, no la del pueblo, representa la autoridad. Santo Tomás y los otros teólogos citados por Balmes á quienes se ha invocado en esta discusión, no defienden la soberanía popular en el sentido en la entiendo y explica la escuela liberal, pues no asegura que la voluntad del pueblo sea el origen de la autoridad, aunque el derecho de quien ó quienes ejerczan, en virtud de la elección, ejerzgan mediata ó inmediatamente de la sociedad; y la doctrina, que sobre este importantísimo asunto sostengo, como verdadero, es la de eminentes escritores como Taparelli, el profundo filósofo y publicista del presente siglo, Taparelli de quien se han reído y se reirán muchos, pero á quien nadie, hasta hoy, ha podido contestar.—Estoy, pues, en contra de la moción, no sólo porque ella, contentando la expresión de mera teoría, no debe ser consignada en una Constitución, en lo que sólo debe haber declaraciones y preceptos prácticos, no principios especulativos, como ya lo dije cuando comencé el debate, más también por ser falsa en cualquier otro sentido que no sea el que he expresado."

El H. Vicepresidente repuso que Balmes sostiene que la soberanía reside en el pueblo, remitiéndose á las doctrinas de eminentes escritores católicos, como lo manifestó ya; que, según él, la soberanía es concedida por Dios inmediatamente al pueblo y este lo trasmite á la autoridad; y que, en tal sentido, esto es, en el sentido católico, en el sentido ortodoxo, acepta el H. exponente la soberanía del pueblo, reconociendo que es una emanación del poder de Dios.

El H. Cordero expuso: "En confirmación de lo que acaba de exponer el H. Enriquez, añadiré algo más.—El cáncer que devora las sociedades modernas, es el socialismo, cuyo absurdo sistema consiste en no

admitir ningún derecho de propiedad, ningún derecho de autoridad. Sus defensores se fundan en que los hombres son completamente iguales, tanto en los bienes como en la autoridad. Hé aquí un funesto principio, del cual, á manera de su fuente, emanan dos grandes errores que desconciertan las naciones: el comunismo y el radicalismo. Proudhon, genuino representante de tales utopías, ha dicho: "La propiedad es un robo."—"Muerte á los reyes; guerra á toda autoridad."

Contrayéndose ahora á este último error, esto es, al radicalismo, llamado así, porque radicalmente destruye las bases de la sociedad civil, quitando del mundo, toda potestad, todo régimen de cualquier género que sea, para investir á cada uno de los ciudadanos de igual autoridad; digo que este error de la civilización moderna nos conduce necesariamente á este otro de la soberanía popular tan decando, y que indudablemente tendría menos adoradores si fuese mejor comprendido.

No faccio, por tanto, Excmo. Sr. en decir que el dogma moderno de la soberanía popular, tal cual lo defienden los radicales, es no solo absurdo y tiránico, sino ateo, como lo demuestran los publicistas católicos.

Aduciré algunas razones muy á la ligera, como me lo permiten las actuales circunstancias.

En efecto, perteneciendo á la autoridad suprema unir y enlazar entre sí las voluntades de los súbditos para encaminarlos al bien común, en el supuesto de la soberanía popular, que supone repartida aquella autoridad y fraccionada entre una multitud de esas voluntades individuales, es incoherente la Constitución y organización de la sociedad; porque esto equivaldría á decir que la causa procede del efecto, lo cual es absurdo. Por otra parte, la teoría enunciada con tanto ardor por el radicalismo, conceder al pueblo un derecho que en la realidad no existe. Se le alucina con que goza de suprema autoridad; que es dueño de sus destinos; que es soberano absoluto; que su voz es la única que debe resonar en el mundo político; y sin embargo, se le obliga á despojarse de sus pretendidos derechos, en el momento mismo de ejercerlos, transfiriéndolos á otro.

Lejos, pues, de conceder al pueblo la soberanía originaria y esencial, hablando en abstracto, (pues no trato aquí de la persona que la ejerce) tenemos que convenir en que sólo le compete ese derecho al creador de la sociedad, para que ella subsista, y se desarrolle después de formada. De la misma manera que la sociabilidad del hombre no viene de la voluntad humana, tampoco proviene de ésta la suprema autoridad para gobernar las sociedades.

Es evidente, además, que todo lo que es una necesidad de la naturaleza, es también una ley de Dios; y como la sociedad es una ley de la naturaleza, de la cual el hombre no puede prescindir, y el poder una ley de la sociedad, resulta, pues, que ese poder es una ley divina. Por consiguiente, no existe, repito, la soberanía del pueblo, ni como la entienden los radicales. De manera que ellos no tienen otro fin, deslumbrados á las masas con esta fingida realidad, que de llevar á cabo detestables proyectos, en contra del mismo pueblo soberano á quien lo convierten en víctima de su tiranía, siendo ésta la aspiración suprema de los especuladores políticos.

Si no nos es dado á los hombres independizarnos de la autoridad de Dios, de quien

